



Revista de Derecho (Valdivia)

ISSN: 0716-9132

revider@uach.cl

Universidad Austral de Chile

Chile

Bordalí Salamanca, Andrés

Legitimación activa del Estado para demandar la reparación del ambiente dañado y una
indemnización de perjuicios (Corte Suprema)

Revista de Derecho (Valdivia), vol. XXIII, núm. 2, diciembre, 2010, pp. 225-235

Universidad Austral de Chile

Valdivia, Chile

Disponibile en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173719209011>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

JURISPRUDENCIA COMENTADA

LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL ESTADO PARA DEMANDAR LA REPARACIÓN DEL
AMBIENTE DAÑADO Y UNA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
(CORTE SUPREMA)

Comentario de Andrés Bordalí Salamanca

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil diez. Vistos:

En estos autos Rol 5027-2008 tanto la parte demandante del Fisco de Chile como los demandados Sociedad Forestal Candelaria Río Puelo, Inversiones Piedras Moras S.A. y Mario González Asencio interpusieron recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que revocó la sentencia de primera instancia en cuanto acogía la demanda indemnizatoria deducida por el Fisco, rechazando dicha acción y confirmó el mismo fallo en cuanto por éste se condena a las sociedades demandadas a la restauración y reparación material del medio ambiente dañado, con costas. Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DEDUCIDO A FS. 487 POR LOS DEMANDADOS:

Primero: Que el recurso denuncia que la sentencia impugnada, al rechazar su alegación de falta de legitimación pasiva, ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil y en los artículos 3º, 51 y 53 de la Ley Nº 19.300, infracción que se produce al realizar una interpretación extensiva y errónea de las citadas normas de la Ley Nº 19.300 referida.

Segundo: Que al explicar la forma en que se ha producido la infracción indica que la norma contenida en el artículo 51 de la Ley Nº 19.300, junto con el artículo 3º de la misma ley, que constituyen la piedra angular de la responsabilidad por daño ambiental, establecen un sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa que contiene el Código Civil, para lo cual es necesario acreditar la culpa o dolo del autor del daño. Añade que el artículo 52 de la misma ley establece una presunción de responsabilidad del autor del daño en los casos que allí se indican, presunción que a su juicio sólo libera de la carga de probar la culpa o dolo del autor del daño ambiental, mas no de la carga de probar la autoría del mismo. Sostiene que, en consecuencia, era el Fisco quien debía acreditar la autoría en los hechos que atribuye a cada uno de los demandados, pues así lo exige el artículo 1698, lo que en la especie no ha ocurrido.

Tercero: Que en cuanto a la forma en que los errores denunciados han influido en lo dispositivo del fallo, las recurrentes indican que de haberse interpretado correctamente el ámbito de aplicación de la presunción contenida en el artículo 52 de la Ley Nº 19.300, junto con la carga de la prueba contenida en el artículo 1698 del Código Civil, necesariamente se habría revocado la sentencia de primer grado por no haberse acreditado los actos que se imputan a cada uno de los demandados, lo que es exigido por los artículos 3 y 51 de la Ley citada.

Cuarto: Que a fin de resolver el recurso resulta conveniente consignar que se han establecido como hechos de la causa los siguientes:

- a) Que los hechos que dieron origen a la demanda acaecieron en el predio denominado La Candelaria, de propiedad de la Sociedad de Inversiones Piedras Moras S.A., y la demandada Forestal Candelaria del Río Puelo S.A. es titular del contrato de explotación del bosque del mismo.
- b) Que se ha provocado al medio ambiente un daño significativo con motivo de las cortas ilegales de alerce verde, coihue y mañío, afectando así componentes del ambiente, agua, suelo y biota.
- c) Que se produjo un daño irreparable respecto al corte de 25 especies de alerce declarado monumento natural y que alcanzaban un diámetro de tres metros, los que podrían llegar a tener unos 3.000 años.

Quinto: Que asimismo consta que por sentencia ejecutoriada pronunciada en los autos Rol 420-2000 seguidos ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, iniciados con ocasión de los mismos hechos que motivan la presente causa, se condenó a la Sociedad de Inversiones Piedras Moras S.A., por infracción a la Ley de Bosques, a una multa de \$ 22.967.200, la que fue rebajada a la mitad por la Corte de Apelaciones de esa ciudad.

Sexto: Que el artículo 52 de la Ley Nº 19.300 establece: Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección o conservación ambientales, establecida en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias.

Séptimo: Que habiéndose establecido la responsabilidad infraccional de la demanda Sociedad de Inversiones Piedras Moras S.A. respecto de las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, al producirse la tala de alerce vivo en el predio de su propiedad, cuya explotación se encontraba a cargo y bajo la responsabilidad de la Sociedad La Candelaria Río Puelo S.A., resulta plenamente aplicable la presunción establecida en el artículo 52 de la Ley Nº 19.300 transcrito en el motivo anterior, sin que se pueda cuestionar nuevamente la existencia de tal responsabilidad so pretexto

de no haberse verificado en forma cierta la identidad del autor material de la tala indiscriminada.

Octavo: Que por lo expuesto, al razonar como lo han hecho los jueces de la instancia, han dado correcta aplicación a las normas que se dicen infringidas, por lo que el recurso de casación en el fondo deducido por las sociedades demandadas no podrá prosperar.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DEDUCIDO POR EL FISCO DE CHILE A FS.473.

Noveno: Que la parte demandante deduce recurso de casación en el fondo en el que denuncia que en el fallo recurrido se han vulnerado dos grupos de normas. En primer lugar, los artículos 2314, 2315 y 2329 del Código Civil, con relación a los artículos 3, 53 y 54 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En segundo término, los artículos 19 inciso primero, 20, 22 inciso primero y 23 parte final del Código Civil.

Décimo: Que explica que la vulneración al primer grupo de normas se produce al restringir la sentencia recurrida la titularidad del Estado de Chile para ejercer la acción indemnizatoria, en circunstancias que la ley sólo limita tal acción al directamente afectado por el daño ambiental. Añade además que ninguna de las normas legales indicadas supedita la procedencia de la indemnización de perjuicios a la necesidad que la víctima o afectado sea propietario o poseedor del bien dañado, como lo hace la sentencia impugnada, bastando que este daño constituya una lesión a un interés jurídicamente protegido, que en el presente caso tiene el Estado de Chile sobre su patrimonio ambiental.

Undécimo: Que respecto del segundo grupo de normas que indica vulneradas explica que la infracción se produce al efectuar el tribunal de alzada una errada interpretación de las normas decisoria litis, esto es los artículos 2314, 2315 y 2329 del Código Civil y 3, 53 y 54 de la Ley N° 19.300, exigiendo requisitos de procedencia de la acción indemnizatoria que la ley no establece.

Duodécimo: Que al explicar la forma en que estos errores han influido en lo dispositivo del fallo, sostiene que de no haber mediado estos errores de interpretación los sentenciadores habrían concluido que la legitimación activa del Estado de Chile para solicitar una indemnización de perjuicios no está dada por su calidad de propietario del predio en los que se ubican los alceres, sino por la afectación o detrimento de su patrimonio ambiental, esto es, por la lesión a un interés jurídicamente protegido. Concluye que de haber razonado como lo sostiene, los sentenciadores habrían confirmado la sentencia de primer grado, condenando a los demandados a reparar materialmente e íntegramente el daño ambiental causado y además a indemnizar al Estado de Chile por tal daño.

Décimo tercero: Que para resolver el recurso se debe consignar que ha quedado establecido como un hecho de la causa que se produjo un daño irreparable respecto al corte de 25 especies de alerce declarado monumento natural y que alcanzaban un diámetro de tres metros, que podrían llegar a tener unos 3.000 años.

Décimo cuarto: Que ha de recordarse, además, que el artículo 53 de la Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente autoriza el ejercicio de dos acciones diversas, a saber, la acción ambiental, que persigue la reparación del daño ambiental causado y cuyos titulares se enumeran en el artículo 54 de la misma ley; y la acción indemnizatoria, que entrega al directamente afectado por el daño y respecto de la cual se aplican las normas de la responsabilidad delictual y cuasidelictual contenidas en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

A su vez, el estatuto de la responsabilidad extracontractual exige para su procedencia la existencia de un hecho voluntario, la culpa o ilicitud de la conducta, el daño y la relación de causalidad.

En el presente caso, la legitimación activa del Fisco para deducir la acción indemnizatoria se cuestiona por no revestir éste la calidad de propietario de las especies dañadas con el actuar ilícito que se atribuye a los demandados, por lo que no tendría la calidad de directamente afectado con el daño.

Décimo quinto: Que a fin de resolver este punto se debe tener presente que por Decreto Supremo Nº 490 del Ministerio de Agricultura, de 1º de octubre de 1976, se declaró Monumento Natural a la especie forestal Alerce o Lahuén, cuyo nombre científico corresponde al de *Fitzroya cupressoides*, declaración que se sustenta en el Decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 531, de 23 de agosto de 1967, que previa aprobación del Congreso Nacional ordenó cumplir como ley de la República la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmada en la ciudad de Washington el 12 de octubre de 1940.

Tal declaración reviste particular importancia respecto de especies vegetales en peligro de extinción o cuya densidad poblacional se encuentre evidentemente reducida o puedan calificarse como vulnerables, raras o escasamente conocidas, ya que prohíbe su corta, descepadura o explotación a fin de conservarlas en su medio ambiente natural, preservando su diversidad genética y evitando su extinción o menoscabo por cualquier medio o alcance del hombre. La importancia de declaración de monumento natural para una especie vegetal radica en que ella equivale a poner la especie en veda permanente, ya que la protección absoluta o inviolabilidad supone que ningún ejemplar de la especie, donde quiera que se encuentre, puede ser intervenido de modo alguno ni para ningún fin, excepto para realizar investigaciones científicas. De esta manera se protege los ejemplares que se encuentren fuera de las áreas de explotación prohibida, tanto en terrenos de dominio público como privado.

Décimo sexto: Que continuando con el análisis seguido hasta ahora, se debe tener presente que el daño ambiental definido en el artículo 2º letra e) de la Ley de Bases

del Medio Ambiente puede tener efectos de carácter temporal, como en el caso que se produce contaminación acústica por faenas que producen un ruido que sobrepasa las normas permitidas, los que llegarán a su fin cuando se concluyan las obras y que además pueden ser mitigados con medidas tales como sistemas de aislamiento de ruido, o cuando se produce contaminación atmosférica por una chimenea industrial que emite determinadas partículas contaminantes, la que se evitará ordenando cesar el uso de la fuente emisora y que con condiciones climáticas favorables verá disminuido su impacto. Pero también los efectos del daño ambiental pueden ser de carácter permanente, lo que se produce, por ejemplo, como en el caso en estudio, con la tala de alguna especie natural protegida y cuya recuperación no resulta posible cualquiera sean las medidas que al respecto se adopten, lo que como se estableció por los sentenciadores de la instancia se tradujo en el corte de 25 especies de alerce declarado monumento natural y que alcanzan un diámetro de tres metros, que podrían llegar a tener unos 3.000 años, especies que no será posible recuperar ni aun por medio de la reforestación.

Décimo séptimo: Que esta afectación de carácter permanente que se ha producido en el presente caso y que se traduce en la pérdida definitiva e irreparable de 25 ejemplares de la especie alerce, protegido como monumento natural por el Estado de Chile, constituye una disminución de la biomasa o biodiversidad, definida como tal en el artículo 2° letra a) de la Ley N° 19.300, que conforma el patrimonio ambiental de la Nación, lo que evidentemente constituye un daño o perjuicio que otorga al Estado el derecho para solicitar a través de los organismos correspondientes su resarcimiento compensatorio por medio de la acción indemnizatoria deducida en autos.

Décimo octavo: Que lo anterior se ve reforzado por lo que dispone el artículo 3° de la Ley N° 19.300, que establece la obligación de indemnizar el daño ambiental de conformidad a la ley. Ello, porque esa norma usa la conjunción e, lo que implica que la reparación ambiental y la indemnización son compatibles y pueden acumularse, cuando la primera no es suficiente para resarcir la dimensión del daño causado, aplicándose a este respecto el estatuto de la responsabilidad extracontractual contenido en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, que obligan al responsable de un delito o cuasidelito al pago de una indemnización.

Además, de estimarse lo contrario, implicaría que la función de prevención especial y general que debe cumplir la responsabilidad ambiental se vería disminuida si sus propias normas la limitaran sólo a la reparación en naturaleza, negando al Estado, que aparece como garante del patrimonio ambiental de la Nación, solicitar la indemnización correspondiente por aquella parte que resulta imposible de reparar, lo que significaría burlar el principio de responsabilidad contenido en la propia ley. (Álvaro Vidal Olivares. Las acciones civiles derivadas del daño ambiental en la Ley N° 19.300. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Año 2007.).

Décimo Noveno: Que al no haberlo estimado así los sentenciadores de la instancia han incurrido en una infracción a lo dispuesto en los artículos 2314, 2315 y 2329 del Código Civil, en relación con los artículos 3, 53 y 54 de la Ley N° 19.300, por lo que el recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco será acogido.

De conformidad asimismo con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 807 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. Que se rechaza el recurso de casación el fondo deducido en lo principal de fs. 487 por las sociedades demandadas en contra de la sentencia de catorce de julio de dos mil ocho, escrita a fs. 468.
- II. Que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fs. 473 por el Fisco de Chile en contra de la misma sentencia, la que se invalida y reemplaza por la que se dicta separadamente y a continuación.

Acordada en la parte que acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco de Chile con el voto en contra de la Ministro señora Egnem, quien estuvo por rechazar también ese arbitrio procesal toda vez que, en su concepto, no se ha vulnerado por los jueces del fondo las normas que en el mismo se señalan como infringidas, en virtud de las siguientes argumentaciones:

Primero: Que en primer lugar, de la sola lectura del artículo 53 de la Ley 19.300 es posible apreciar el sentido de dicho texto, en cuanto, distinguiendo claramente dos acciones, reparatoria del medio ambiente e indemnizatoria, sólo respecto de la primera cuidó de sindicar expresamente como legitimado activo a todo evento entre otros, al Estado de Chile, en tanto reservó la segunda, esto es la indemnizatoria, al directamente afectado bajo la premisa de ser aplicables en este caso las normas generales de Código Civil, lo que no ha sido cuestionado.

Segundo: Que en la normativa de responsabilidad por daño antes referida del Código Civil, artículo 2314 y siguientes, emerge como víctima del daño patrimonial –acotado de esta forma a partir del hecho que la demanda sobre el punto se funda aludiendo al daño producido al patrimonio ambiental y particularmente de las especies más valiosas– y, por ende, como legitimado para ejercer la acción pertinente, quien ha sufrido menoscabo o detrimento en su patrimonio. Evidentemente se trata de un daño que traduce un significado económico que es necesario compensar o resarcir, sea porque se produjo una pérdida o disminución de su haber (daño emergente) o porque se amagó o disminuyó la posibilidad de incremento (lucro cesante). En cualquiera de estos escenarios, quien sufre o experimenta tales detrimentos es el titular de los bienes corporales dañados, en la especie declarados monumento nacional, calidad o titularidad que el Estado de Chile no tiene pues indiscutidamente no se trata de bienes fiscales ni de bienes nacionales de uso público, sino de especies privadas sujetas a las limitaciones del dominio para quien lo detenta, atendida la calidad ya mencionada de las especies de que se trata.

Tercero: Que precisamente por estar comprometido, en la preservación de la especie arbórea que es materia de esta causa, el interés general de la comunidad que por lo mismo corresponde al Estado cautelar y asegurar –es que la ley acuerda expresamente a este último legitimidad activa para incoar y llevar adelante la acción reparatoria en

relación con el medio ambiente. Sin embargo, ello no puede significar que se haga extensiva a favor del Estado, por esta vía, la acción para cobrar perjuicios por daño patrimonial, acudiendo como lo revela el tenor de la demanda de autos– a una difusa conceptualización de daño que se desmarca del contenido y categorías de los perjuicios ya referidos en lo que precede y que corresponden a lo que el derecho común regula como patrimoniales.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carreño y del voto disidente su autora. Rol N° 5027-2008 Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito, Sra. Rosa Egnem y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Abogado Integrante Sr. Mauriz por estar ausente. Santiago, 31 de agosto de 2010.

Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, a treinta y uno de agosto de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil diez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su motivo séptimo, que se elimina.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que el Consejo de Defensa del Estado ha ejercido, además de la acción por daño ambiental, la acción de indemnización de perjuicios en contra de los demandados Sociedad de Inversiones Piedras Moras S.A., Forestal Candelaria de Río Puelo S.A. y de don Mario González Asencio, fundándola en la responsabilidad civil extracontractual. Segundo: Que las sociedades demandadas han alegado la falta de legitimación activa del Estado para solicitar la indemnización que establece en su parte final el artículo 53 de la Ley N° 19.300, la que se encuentra reservada al directamente afectado por el daño ambiental, calidad que a su juicio no reviste el Fisco de Chile.

Tercero: Que el artículo 53 de la Ley 19.300 contempla la posibilidad de solicitar indemnización por el daño ambiental causado al directamente afectado, calidad que no

define, por lo que ha de estarse a la situación particular de cada caso concreto a fin de establecer quién es el autorizado para accionar por esta vía.

Cuarto: Que en primer término se debe considerar que el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Código Civil, aplicable a la acción indemnizatoria en comento, no exige para su ejercicio revestir la calidad de propietario del bien afectado por el actuar ilícito, reconociendo en su artículo 2315 la posibilidad de solicitar la indemnización a quienes revisten calidades diversas, como poseedor, usufructuario, usuario o habitador, bastando que quien solicita el resarcimiento se haya visto lesionado en su patrimonio.

Quinto: Que tal como se razonó en el fallo de casación, el Estado de Chile reviste la calidad de directamente afectado atendida la especial situación jurídica de la especie vegetal sobre la cual recayó el daño, ya que por haberse declarado el alerce como Monumento Natural con las consecuencias que ello implica, tanto su tala como su explotación se encuentran prohibidas. Asimismo, por tratarse de un perjuicio de carácter permanente que no admite reparación y que constituye una disminución en la biodiversidad que conforma el patrimonio ambiental de la Nación, el Estado de Chile se encuentra legitimado en este caso particular para demandar la indemnización que solicita.

Sexto: Que son requisitos para que exista responsabilidad extracontractual la existencia de un acto voluntario, la culpa o dolo del agente de esa conducta, el daño y la relación de causalidad, elementos todos que concurren en la especie, ya que se ha determinado la responsabilidad infraccional de las sociedades demandadas, el daño sufrido por el Estado de Chile (en los términos que se indican en los motivos que preceden) y la relación existente entre el actuar que se reprocha a los demandados y el perjuicio producido.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 2314, 2315, 2329 del Código Civil y 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de treinta de agosto de dos mil siete, escrita a fs. 269.

Acordada con el voto en contra de la Ministro señora Egnem, quien estuvo por revocar la sentencia de primer grado y rechazar la demanda deducida por el Fisco, en razón de las consideraciones formuladas en su disidencia contenida en el fallo de casación.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carreño.

Rol Nº 5027-2008. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Aráneda, Sr. Haroldo Brito, Sra. Rosa Egnem y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Abogado Integrante Sr. Mauriz por estar ausente. Santiago, 31 de agosto de 2010.

Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, a treinta y uno de agosto de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

COMENTARIO

A diferencia de las leyes procesales de otros países, las leyes chilenas utilizan generalmente la expresión “son titulares de la acción” para referirse a quienes están legitimados activamente para deducir la acción o, si se quiere, para deducir la pretensión respectiva. La Ley de Bases del Medio Ambiente se inscribe en esta línea, pues en su artículo 53 señala que “Producido daño ambiental, se concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado”. Asimismo el artículo 54 de la misma Ley expresa que “son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas y el Estado”.

Sin perjuicio de que las leyes procesales chilenas vigentes, como regla general no utilizan la expresión legitimación activa ni legitimado activo, hay que señalar que los tribunales de justicia sí lo hacen y con bastante habitualidad. El fallo que comentamos es una muestra de ello.

Algunas leyes chilenas más contemporáneas, como la Ley de Protección a los Consumidores, utilizan la expresión legitimado activo (arts. 51 3. y 52 a)). El Proyecto de Código Procesal Civil también se refiere a la legitimación en su artículo 245 n° 9.

Ahora bien, la utilización de la expresión legal “son titulares de la acción” y la utilización en las sentencias definitivas de los tribunales de justicia de la expresión legitimado activo, acarrearán sus respectivos problemas.

Si pensamos que hoy en día la acción es entendida como un derecho de carácter fundamental reconocido en las constituciones (derecho a la tutela judicial) y que pertenece, en cuanto derecho fundamental, a todas las personas, cualquier definición restrictiva de la ley en cuanto a quiénes sean los titulares de este derecho fundamental podría dar lugar a problemas de constitucionalidad. Lo que se recomienda por tanto al legislador es no definir quiénes son los titulares de este derecho de acción. Aparece menos problemático desde un punto de vista constitucional que el legislador utilice expresiones tales como “son legitimados activos”; “podrán demandar”, etcétera, en vez de “son titulares de la acción”.

Por otra parte, si los jueces en sus sentencias definitivas declaran que quien demandó es un legitimado activo, puede ser que se le esté dando una consideración material o sustancial al término, lo que no se corresponde con el carácter procesal de la institución en juego. También puede ser que la connotación que se le dé al término legitimación en la sentencia definitiva sea de carácter procesal, pero la sentencia definitiva no es el mejor momento ni lugar para controlar esa institución de carácter procesal.

En un proceso judicial hay que distinguir entre la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica material que se deduce en él, que forma parte del derecho material y que será la cuestión de fondo que se plantea al tribunal y respecto de la que se pide un pronunciamiento con todos los efectos propios de la cosa juzgada y, por otra parte, como cuestión diferente, la posición habilitante para formular la pretensión (legitimación activa) o para que contra alguien se formule (legitimación pasiva), en condiciones de ser examinada por el órgano jurisdiccional en cuanto al fondo, que está regulada consiguientemente por normas de naturaleza procesal. Por ello, la legitimación resuelve sólo la cuestión de quién puede pedir en juicio la actuación del derecho objetivo en el caso concreto y contra quién puede pedirse. Cumple de esta manera un rol de presupuesto procesal.

La legitimación, de este modo, sólo puede tener una naturaleza de carácter procesal y no sustantiva. Podrá tener una proyección material, si se quiere, en cuanto tiene relación con el asunto debatido en el juicio, pero no es una cuestión estrictamente material. En forma sustancial hablaremos del titular de un derecho o interés, por un lado, o del obligado o responsable, por el otro. Pero lo que no hace falta es llamar a esas personas legitimado activo o pasivo.

Si el concepto de legitimación es de carácter procesal, lo aconsejable es comprobar su existencia *in limine litis* y no en la sentencia definitiva. Los procesos colectivos en materia de consumo chilenos así lo hacen y ese debe ser el modelo a seguir.

Entonces, los consejos que se pueden dar al legislador y a los jueces son los siguientes. Al primero, es que en las leyes procesales futuras contemple un control de la existencia de la legitimación al comienzo del proceso, ya sea dentro de una fase de admisibilidad o bien conociendo de una excepción dilatoria. A los jueces se les puede recomendar que mientras no exista una regulación de esta materia dada por la ley, no utilicen el concepto de legitimación con un carácter material o sustantivo.

En tanto no se regule la legitimación y su control *in limine litis*, mediante la ley respectiva, los jueces podrán controlarla en la sentencia definitiva, pero deberán separar claramente en su decisión, si es que se ha alegado sobre el punto, si quien demandó es o no legitimado activo o si quien fue demandado es o no legitimado pasivo y, luego, resolver la cuestión del fondo determinando si el que demandó es titular del derecho o interés reclamado y si el demandado resulta obligado o responsable. Lo que no resulta aceptable es que para referirse a esta última cuestión se señale que el actor es legitimado activo o el demandado es legitimado pasivo.

El fallo en cuestión no distingue claramente entre los conceptos de acción, legitimación activa y reconocimiento de un derecho material. En el fallo de casación se señala que se estableció en la causa el daño ambiental producto de la tala de 25 ejemplares de la especie de Alerce, lo “que otorga al Estado el derecho para solicitar a través de los organismos correspondientes su resarcimiento compensatorio por medio de la acción indemnizatoria deducida en autos”.

Más correcto habría sido señalar que generado daño ambiental producto de la tala de esos 25 ejemplares de alerce que forman parte del patrimonio ambiental de la Nación, el Estado está legitimado activamente para solicitar a través de los organismos

correspondientes su resarcimiento compensatorio por medio de la demanda indemnizatoria deducida en autos y, en definitiva, el Estado tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios que le han causado los demandados. Las cosas por su nombre.